

Santiago, ocho de agosto de dos mil veinticuatro.

**Visto y teniendo presente:**

**Primero:** Que don Eric Arce Hernández, abogado, por el demandante Sindicato de Trabajadores Lan Express, en autos sobre nulidad absoluta de anexos individuales de contratos y cobro de prestaciones, seguidos antes el Primer Juzgado de Letras de Trabajo de Santiago, caratulados “Sindicato Lan Express con Transportes Aéreos S.A.”, RIT O-5493-2023 y RUC 2340504060-3, deduce recurso de queja en contra del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, sr. Mario Rojas González y la fiscal judicial sra. Clara Carrasco Andonie, atendido que, por resolución de trece de noviembre de dos mil veintitrés, confirmaron aquella de seis de septiembre del mismo año, que dio lugar a la excepción de prescripción extintiva de la acción de nulidad, opuesta por la demandada.

Señala que la falta o abuso grave se traduce en la falta de aplicación del artículo 8 de la Ley N° 21.226 en relación con la Ley N° 21.379, generándole perjuicio y comprometiendo gravemente la tutela judicial efectiva, pues de dichas leyes es posible concluir que se dispuso una prórroga de los plazos de suspensión y caducidad de las acciones laborales hasta cincuenta días contados desde la fecha en que cese el estado de excepción constitucional de catástrofe y que, a la fecha de presentación de la medida prejudicial probatoria, esto es, el 6 de mayo de 2020, y de la presentación de la demanda, el 22 de julio de 2023, continuaba vigente, pues los derechos laborales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 510 del Código del Trabajo, prescriben en el plazo de dos años contados desde que se hicieron exigibles, estableciéndose, en el inciso quinto, un plazo de prescripción de corto tiempo, el que fue modificado por el referido artículo 8 de la Ley N° 21.226, que permitió computar el plazo a partir del día 30 de noviembre de 2023, fecha establecida como término del estado de excepción constitucional de catástrofe.

De esta forma, estando la medida prejudicial, la demanda y sus respectivas notificaciones dentro del plazo de dos años referidos en el artículo 510 del estatuto laboral, la judicatura del fondo incurrió en falta o abuso grave al entender que la norma en cuestión no contempló la suspensión de los plazos para interponer las acciones en materia laboral que hubieren comenzado a correr con anterioridad al estado de excepción constitucional, limitación que no se encuentra establecida en la ley, que vulneró el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, privándolo de un pronunciamiento de fondo sobre el conflicto de relevancia jurídica sometido a la decisión de la jurisdicción.



Solicita, en definitiva, acoger el recurso en todas sus partes, dejando sin efecto la resolución que lo motiva y reemplazarla por aquella que rechace la referida excepción de prescripción extintiva de la acción, sin perjuicio de las facultades disciplinarias que se pudiesen aplicar.

**Segundo:** Que los recurridos al informar señalaron que confirmaron la resolución apelada por compartir los argumentos que contiene, no observando la existencia de falta o abuso grave que amerite una corrección propia del recurso interpuesto.

**Tercero:** Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, nominado “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales”, y su acápite primero, que lleva el nombre de “Las facultades disciplinarias”, contiene el artículo 545 que lo consagra como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias definitivas e interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

**Cuarto:** Que esta Corte ha ido precisando, por la vía de la jurisprudencia, los casos en que se está en presencia de una falta o abuso grave. Así, ha sostenido que se configura, entre otros casos, cuando se incurre en una falsa apreciación del mérito del proceso, circunstancia que se presenta cuando se dicta una resolución judicial de manera arbitraria, por valorarse de forma errónea los antecedentes recabados en las etapas procesales respectivas (Mario Mosquera Ruiz y Cristián Maturana Miquel, *Los recursos procesales*, Editorial Jurídica, Santiago, año 2010, p. 387).

En este sentido es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir “faltas o abusos graves” cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la “trascendencia”, y que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que la falta o abuso tenga una influencia sustancial, esencial, trascendente en la parte dispositiva de la sentencia. (Barahona Avendaño, José Miguel, *El recurso de queja. Una Interpretación Funcional*, Editorial Lexis Nexis, 1998, p. 40); situación que puede configurarse, por ejemplo, cuando por un incorrecto análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa aplicable se priva a una parte del derecho a la tutela judicial efectiva.

**Quinto:** Que del examen de los antecedentes obtenidos del sistema computacional se advierte la concurrencia de los siguientes antecedentes:



a) Con fecha 6 de mayo de 2020, don Eric Arce Hernández, por el Sindicato de Trabajadores Lan Express S.A., solicitó ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que se decretara la medida prejudicial probatoria prevista en el artículo 273 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la exhibición de documentos que se encuentran en poder de la futura demandada, Transportes Aéreos S.A. (Lan Express), siendo acogida con fecha 8 de mayo de 2020, notificándose a la demandada el 16 de junio del mismo año y citándose a la respectiva audiencia de exhibición para el 7 de agosto de 2020.

b) Con fecha 6 de agosto de 2020, la demandada acompañó cuatro de los cinco documentos que se le ordenó exhibir en virtud de la medida prejudicial.

c) El tribunal de instancia, con fecha 7 de agosto de 2020, atendida la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe y las instrucciones impartidas por esta Corte, dejó sin efecto la audiencia de exhibición de documentos, sin reprogramar nueva fecha, archivándose los antecedentes el 16 de noviembre de 2021.

d) Con fecha 14 de abril de 2023, la judicatura de instancia a petición del actor ordenó el desarchivo de la causa y, respecto de la medida prejudicial probatoria, otorgó a la demandada el plazo de cinco días hábiles para incorporar la totalidad de la documentación solicitada, bajo apercibimiento de tener por no cumplida la diligencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil, resolución que se le notificó el 20 de abril del mismo año.

e) La demandada acompañó la documentación solicitada con fecha 16 de junio de 2023, otorgándose al actor el plazo de 30 días para formular las alegaciones que estime pertinentes con relación a la diligencia de exhibición documental.

f) Con fecha 22 de julio de 2023 se interpuso demanda de nulidad absoluta de los anexos de contratos individuales de trabajo, celebrados con fechas 1 de abril, 1 de julio 1 de octubre de 2020, y cobro de prestaciones laborales, que fue rectificada y ampliada el fecha 27 de julio del mismo año y notificada a la demandada el 10 de agosto de 2023, contestándola y oponiendo la excepción de prescripción de la acción con fecha 30 del mismo mes y año.

g) En la audiencia preparatoria celebrada el 6 de septiembre de 2023, el tribunal de instancia acogió la referida excepción señalando que *“...ha transcurrido el plazo de dos años, sin perjuicio de la interrupción producida por la medida prejudicial, pero sin los efectos que la parte demandante pretende. Esto es, que la interrupción supone la pérdida del tiempo transcurrido, pero este sigue computándose. Desde la notificación, incluso el cumplimiento de la medida*



*prejudicial comenzó nuevamente a computarse el plazo de prescripción (interrupción y no suspensión), configurándose la causal del artículo 510 del Código del Trabajo”, decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 13 de noviembre último.*

**Sexto:** Que la prescripción, en cuanto modo de extinguir las obligaciones y acciones, tiene como fundamentos dogmáticos, según la doctrina, los siguientes: propender a la estabilidad de situaciones existentes, a fin de mantener el orden y tranquilidad sociales, erigiéndose como un obstáculo a dicha finalidad que los derechos de las partes se mantengan en la incertidumbre; afianzar definitivamente una situación de hecho que se ha manifestado pública y pacíficamente, por un largo espacio de tiempo, con el sello de la legalidad; evitar litigios acerca de hechos o situaciones que escapan a toda prueba o comprobación, pues, de lo contrario, los deudores tendrían que conservar las pruebas de la extinción de las obligaciones asumidas durante un largo tiempo, que puede tornarse indefinido; la presunción de pago o de satisfacción de la respectiva obligación que se genera a partir de la conducta asumida por el acreedor y que consiste, precisamente, en no ejercer la acción judicial respectiva ante los tribunales para obtener su satisfacción forzada; la presunción de abandono del derecho a la prestación debida de parte del acreedor; sancionar al acreedor por su negligencia en el ejercicio de los derechos consagrados en las leyes, por no iniciar a tiempo las acciones judiciales tendientes a su reconocimiento, esto es, por su inactividad prolongada y culpable. (Fueyo Laneri, Fernando, Derecho Civil. De las obligaciones, Tomo 4º, Volumen II, Imprenta y Litografía Universo, Santiago, Chile, 1958, p.234-236, y Domínguez Benavente, Ramón, Algunas consideraciones sobre la prescripción En: Revista de Derecho Universidad de Concepción 15 (59): ene-mar 1947, p.721-723).

**Séptimo:** Que, tal como ha sido sostenido reiteradamente por esta Corte (roles 23.043-2018 y 36.485-2015, entre otros), uno de los intereses que deben ser protegidos y útil a la resolución que debe ser adoptada, dice relación con el derecho de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia para la protección de sus derechos, también conocido en la doctrina moderna como derecho a la tutela judicial efectiva, asegurado por el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, aunque no esté designado expresamente en su texto, carecería de sentido que se hubiese esmerado en asegurar la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el juez natural, el derecho a un justo y racional procedimiento, si no partiera de la base de la existencia de un derecho anterior a todos los demás y que es presupuesto básico para su vigencia, esto es, el derecho de toda persona a ser juzgada; a presentarse ante la



judicatura, a ocurrir ante ella, sin estorbos o condiciones que se lo dificulten, retarden o impidan arbitraria o ilegítimamente. En el actual estado de desarrollo del derecho nacional e interpretando la garantía constitucional de acceso a la justicia con un criterio finalista, amplio y garantista, cualquier limitación por vía de interpretación que obste al derecho a la tutela judicial, aparece despojada de la razonabilidad y justificación que precisaría para ser aceptada como admisible a la luz de lo dispuesto en el N° 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

**Octavo:** Que, en otro orden de consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en la especie atendido lo que establece el artículo 432 del Código del Trabajo, el juicio se puede preparar exigiendo, el que pretende demandar de aquel contra quien se propone dirigir la demanda, entre otras medidas prejudiciales, “la exhibición de sentencias, testamentos, inventarios, tasaciones, títulos de propiedad u otros instrumentos públicos o privados que por su naturaleza puedan interesar a diversas personas”. Por su parte, el artículo 287 del mismo cuerpo legal dispone: “Para decretar las medidas de que trata este Título, deberá el que las solicite expresar la acción que se propone deducir y someramente sus fundamentos”.

**Noveno:** Que de la relación de los antecedentes consignada en el motivo Quinto, aparece que la medida prejudicial probatoria fue interpuesta el 6 de mayo de 2020; notificada a la demandada el 16 de junio del mismo año, la que acompañó la documentación solicitada el 16 de junio de 2023. En consecuencia, se debe concluir que como la parte demandante recurrió ante el tribunal respectivo para la obtener resolución del conflicto jurídico, efectuando las actuaciones procesales pertinentes para obtener la exhibición de los documentos necesarios para fundamentar la demanda, lo que logró el 16 de junio de 2023, interrumpiéndose el plazo contemplado en el inciso primero del artículo 510 del estatuto laboral, la excepción de prescripción extintiva de la acción debió haber sido desestimada.

**Décimo:** Que, de esta forma, la conclusión a la que arribó la judicatura, señalada en el motivo segundo, aparece que fue fruto de una interpretación que no respetó los preceptos legales referidos y, además, el carácter tutelar del Derecho del Trabajo, privando a la demandante de la potestad a reclamar ante la sede jurisdiccional competente los derechos que estima vulnerados, razón por la que se acogerá el recurso de queja en los términos que se indicarán.

Por estas consideraciones y normas legales citadas, **se acoge** el recurso de queja deducido por Eric Arce Hernández, abogado, por el demandante Sindicato de Trabajadores Lan Express y, en consecuencia, **se deja sin efecto** la sentencia de trece de noviembre de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de



Apelaciones de Santiago en los autos Ingreso Corte N° 3149-2023, que confirmó aquella de seis de septiembre último, emanada del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en los autos RIT O-5493-2023 y RUC 2340504060-3, que acogió la excepción de prescripción extintiva de la acción, y, por lo tanto se declara que **se rechaza** la referida excepción, debiendo citarse a las partes a la audiencia preparatoria respectiva, fijando día y hora al efecto, dando prioridad en el agendamiento.

No se dispone la remisión de estos antecedentes al Pleno por tratarse de un asunto en que la inobservancia constatada no puede ser estimada como una falta o abuso que lo amerite.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 245.986-2023.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., Ministro Suplente señor Juan Manuel Muñoz P., y las Abogadas Integrantes señoras Pía Tavolarí G., e Irene Rojas M. Santiago, ocho de agosto de dos mil veinticuatro.



En Santiago, a ocho de agosto de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

